

La acción política de la Federación Agraria Argentina durante el período de la Convertibilidad (1991-2001)

Nicolás Pérez Trento

Universidad Nacional de General Sarmiento – Instituto de Desarrollo Económico y Social
Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas
Argentina
nicolasperezrento@hotmail.com

Resumen

En este artículo nos enfocamos en la acción política de la Federación Agraria Argentina durante la Convertibilidad. Específicamente, nos detendremos en la relación que establece con los Gobiernos neoliberales y con las restantes organizaciones rurales. Para hacerlo, buscaremos reconstruir tanto la serie de acciones políticas emprendidas por esta organización como la interpretación de la coyuntura política y económica, utilizando como fuentes notas de periódicos, documentos de la entidad y entrevistas realizadas a sus miembros. Se destacan, como resultados principales, la identificación del “modelo neoliberal” como principal enemigo y el acercamiento a entidades a las que había enfrentado en períodos previos.

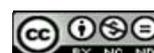
Palabras clave: Acción política; Organizaciones agrarias; Federación Agraria; Neoliberalismo

The political action of the Federación Agraria Argentina during the Convertibility period

Abstract

In this article we focus on the political action of the Federación Agraria Argentina during the period of the convertibility (1991-2001). Specifically, we aim to establish the relation between this organization and the neoliberal governments, as well as with other rural organizations. To this end, we will seek to rebuild the series of political actions undertaken by this entity and its interpretation of the political and economic situation, by using newspaper notes, entity documents and interviews with its members as sources. As main results, we can stand out that the “neoliberal model” is identified as the main enemy, and that the FAA has approached entities that had previously faced.

Keywords: Political action; Agrarian organizations; Federación Agraria; Neoliberalism



Introducción

El conflicto desatado en marzo de 2008, en torno al alza de las retenciones a la exportación de mercancías agrarias, se ha convertido en uno de los sucesos políticos más salientes, a nivel nacional, de la primera década del siglo.

Entre los múltiples aspectos que dieron lugar a su singularidad, sobresale la reedición de la llamada "Mesa de Enlace", nombre con el que se conoció a la alianza bajo la que actuaron coordinadamente las cuatro organizaciones agrarias de alcance nacional. Y, en el interior de esta, se destaca especialmente la participación de la Federación Agraria Argentina (FAA), al lado de entidades con las que mantuvo históricamente una relación de enfrentamiento, como la Sociedad Rural Argentina (SRA) o Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), hecho que se convirtió en el foco de distintos análisis.¹

El acercamiento de la FAA a estas entidades, sin embargo, no es un hecho novedoso. En este sentido, el período regido por la Ley de Convertibilidad (1991-2001) se configura como un antecedente que puede ser considerado como la antesala de dicha confluencia, no sólo por la permanente capacidad que exhibió esta entidad para sumar a la CRA las reiteradas acciones con las que enfrentó a los gobiernos de Menem y de de la Rúa, sino porque hacia el final de la década las cuatro entidades lograron unificar su acción en un extenso paro, y se puso en evidencia así, tempranamente, su capacidad de actuar de forma coordinada.

En este trabajo nos proponemos, por lo tanto, indagar en la acción política de la FAA durante los años de la Convertibilidad, en los que se muestra particularmente activa. Vamos a centrarnos principalmente en dos aspectos: en primer lugar, en la interpretación que efectúa respecto de la coyuntura política y económica; y, en segundo lugar, en la forma en que busca intervenir sobre esta, y nos detendremos específicamente en las alianzas que forja para hacerlo.

Esto implica detenerse en la acción desarrollada por la dirigencia de la entidad. Cabe destacar, en este sentido, que el curso de acción seguido por ésta emerge en parte como resultado de la dinámica interna de la organización, atravesada por diferentes posicionamientos y estrategias políticas, así como por una marcada heterogeneidad en su base social. Heterogeneidad que, a su vez, puede resultar en una gran dificultad para procesar políticamente las demandas de los distintos sujetos sociales representados, de forma tal que la acción resultante no siempre logra canalizarlas adecuadamente. En la medida de lo posible, por tanto, hemos procurado incorporar al análisis estas dinámicas.

Para avanzar, entonces, en el análisis propuesto, será necesario reconstruir la larga serie de paros y de movilizaciones de distinto tipo que la FAA realiza a lo largo del período; lo haremos principalmente mediante notas publicadas en periódicos. Asimismo, utilizaremos entrevistas y publicaciones de la entidad para obtener un acercamiento más preciso a la forma en que dicha organización interpretó este escenario y cómo actuó sobre él.

1. La estructura social agraria en la región pampeana y las entidades agrarias

El origen de la FAA está directamente relacionado con las características de la estructura social agraria pampeana de principios del siglo XX, que son aún hoy objeto de debate. Durante un tiempo predominó la posteriormente denominada “visión tradicional”, en la que la agricultura aparecía subordinada a las grandes estancias ganaderas. De acuerdo a esta lectura, el vínculo entre ganadería y agricultura se habría articulado a través de la propiedad de la tierra, que estaba en manos de los terratenientes-capitalistas ganaderos, mientras que los agricultores se constituyeron como arrendatarios. Las principales características de estos últimos radicarían en su pequeño tamaño, su relativa incapacidad para acumular capital y en la organización de la producción mediante la fuerza de trabajo propia y la de los miembros de su familia. Posteriormente, distintos trabajos fueron lentamente desarticulando los supuestos sobre los que se asentaba este análisis, y mostraron una estructura social mucho más compleja (Barsky y Pucciarelli, 1991; Balsa, 2006).

El peso de los agricultores arrendatarios en esta estructura, sin embargo, fue determinante para la conformación de la FAA, que se constituyó como su representante específico. El fracaso en la cosecha de maíz en 1911 así como el estado general de endeudamiento, agravado por la posterior caída en el precio comercial del grano, se cristalizaron en una serie de movilizaciones con epicentro en el sur de Santa Fe y lograron extenderse a las restantes provincias de la región pampeana. De este movimiento emergió, al año siguiente, la FAA. Como representante de una masa de capitalistas arrendatarios, uno de sus objetivos principales consistió en la regulación del sistema de arrendamientos, lo que la llevó a confrontar directamente con los terratenientes (Bonaudo y Godoy, 1985).

Estos, por su parte, tenían su representación más acabada en la SRA, en la que se nucleaban los terratenientes-capitalistas ganaderos de mayor tamaño, distribuidos principalmente sobre la región pampeana. Su propósito inicial radicaba en el mejoramiento técnico de las condiciones de producción ganadera (de Palomino, 1988).² Sin embargo, el doble carácter de capitalistas y propietarios de grandes extensiones del suelo que caracterizaba a sus miembros (que podrían así ser definidos como burguesía terrateniente o capitalistas-terratenientes) la convirtió en representante de ambas clases sociales.³ En la década de 1930, la representación de estos sujetos sociales comenzó a escindirse con la creación de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP), organización que agruparía a los ganaderos criadores, mientras que los invernadores se mantendrían nucleados en la SRA. Hacia 1943, CARBAP se coaligó con otras confederaciones del interior para conformar Confederaciones Rurales Argentinas (CRA).

En síntesis, la estructura originaria de representación de intereses políticos del sector agrario oponía, de un lado, a pequeños capitalistas agrícolas y productores independientes,⁴ ambos arrendatarios, y, del otro, a terratenientes-capitalistas, fundamentalmente ganaderos.⁵ La relación entre las entidades, consecuentemente, tenía un carácter antagónico; en especial, sobresalía la abierta hostilidad con que la FAA enfrentaba a la SRA (Hora, 2010). Sin embargo, las transformaciones que atravesó la

estructura social agraria durante el llamado “período de estancamiento” tendieron a diluir parcialmente este antagonismo.

En efecto, cuando hacia 1967 el Gobierno de Onganía puso fin a un período de veinticinco años de leyes que congelaron virtualmente los cánones de arrendamiento y dificultaron los desalojos, comenzó a cerrarse en la región pampeana un proceso de desconcentración de la propiedad que trastocó la estructura social agraria pampeana. Durante este período, dicha estructura se había transformado de forma tal que el principal modo de tenencia de la tierra no era ya el arrendamiento sino la propiedad. En este sentido, la bibliografía destaca tanto la conversión de los arrendatarios en propietarios por efectos directos e indirectos de estas políticas (Flichman, 1977; Forni y Tort, 1984; Lattuada, 1988) como la expulsión de un buen número de ellos por parte de los terratenientes, que recuperaban así el control sobre sus tierras (Slutzky, 1968); mientras que otros autores ponderan ambos fenómenos (Barsky y Pucciarelli, 1991; Balsa, 2006).

De este modo, la base social de la FAA atravesaba un proceso de transformación. De la gran masa de pequeños capitalistas agrícolas arrendatarios que la conformaban, buena parte había accedido a la propiedad de la tierra, mientras que otra fracción había sido desalojada, y perdió en muchos casos su carácter de capitalista. Cualquiera fuera el caso, hacia el fin de este período, la mayoría de los socios de la entidad habían logrado sumar a su condición de pequeños capitalistas la de pequeños terratenientes. Más específicamente, Makler (2007) sugiere que este proceso tuvo su auge durante los primeros años de la década peronista y luego se desarrolló más lentamente. Así, al menos en lo que hace a una buena parte de su base social pampeana, también esta entidad comenzó a asumir la representación de los capitalistas-terratenientes, en particular de los de menor tamaño. Al mismo tiempo, el sistema tradicional de arrendamientos se cerraría definitivamente en 1968 para dar lugar a uno de mayor flexibilidad. Estos hechos tendieron a diluir la relación antagónica que la entidad había entablado con la SRA y la CRA, y ampliaban el espacio para la realización de acciones conjuntas.⁶ El conflicto del año 2008, como señalamos, se constituyó como uno de las más potentes.

Sin embargo, el período regido por la Ley de Convertibilidad también es particularmente rico para el análisis, en la medida en que se trata de una década en que la FAA se muestra especialmente activa. Antes de avanzar sobre esta cuestión, no obstante, nos detendremos en algunos de los aspectos que presentó la acumulación de capital en la rama agraria durante estos años.

2. La acumulación de capital en la rama agraria durante la Convertibilidad

El rasgo más notorio del período de la Convertibilidad es la marcada aceleración del proceso de concentración y centralización del capital agrario, que se expresa en la expulsión de la producción de los capitales más pequeños de la rama y en un incremento de su tamaño medio.

Estos fenómenos comienzan a hacerse evidentes en décadas anteriores. La comparación entre los Censos Nacionales Agropecuarios (CNA) de los años 1969 y 1988 arroja que, en el interior de la región pampeana, desaparece casi la mitad de las unidades menores a 100 ha, que se reducen a

unas 85 mil explotaciones. Al mismo tiempo, el tamaño promedio del total de estas se eleva de 278 a 379 ha.

Durante la Convertibilidad, esta tendencia se exagera, como puede verse en el CNA de 2002, que capta precisamente el momento de la crisis que cierra el período. En efecto, este último censo muestra la liquidación de más de cincuenta mil explotaciones, esta vez en la franja de las menores a 500 ha. Al mismo tiempo, y en parte como consecuencia de ello, el tamaño medio del total asciende ahora a 510 ha.

Este proceso se realiza mediado por una serie de políticas implementadas a principios de la década, entre las que se destacan la propia ley de Convertibilidad (que sostuvo una marcada sobrevaluación de la moneda, con lo que abarató la importación de medios de producción capaces de elevar la productividad del trabajo agrario), la desregulación de los mercados agrarios y la eliminación de los impuestos a la importación y exportación, los sucesivos incrementos en el valor del combustible y de los peajes en rutas (que incidieron a su vez en el de los fletes), la desregulación de los contratos de arrendamiento, la escasa oferta de crédito y las altas tasas de interés para la producción agropecuaria (Fernández, 2008).

Estas reformas han resultado en un fuerte proceso de concentración y centralización del capital agrario, que tuvo un doble efecto: por una parte, incrementó en buena medida la productividad del trabajo que los capitales ponen en marcha, lo que se expresó en una serie de cosechas record; por otra parte, aceleró marcadamente la expulsión de la producción de una enorme fracción de los capitales más pequeños, cuya escala comenzó a resultar insuficiente. La introducción de un nuevo paquete tecnológico, compuesto por la utilización de semillas transgénicas, siembra directa y glifosato, intensificó estos fenómenos. Si por un lado redujo los costos unitarios de producción (Bisang, 2007), por el otro la magnitud de capital mínimo necesario para poner en marcha los procesos de producción tendió a incrementarse, lo que afectó especialmente a los capitalistas de menor tamaño (Gras y Hernández, 2009).

Un buen número de estos capitalistas, como señalamos, fue barrido de la producción. Algunos otros, no obstante, lograron mantenerse en actividad en la rama, ya sea por haber sido capaces de retener su maquinaria, en cuyo caso pasaron a engrosar las filas de los contratistas de producción, o por la propiedad de la tierra, con lo que se convirtieron en meros rentistas (Gras, 2010).

En el otro extremo de la escala, por otra parte, comienzan a ganar peso los llamados “*pools* de siembra”. Se trata de firmas que concentran y gestionan grandes magnitudes de capital, tanto agrario como extraagrario. Esta forma de organización de la producción tuvo un primer ciclo de auge hacia mediados de la década analizada, que se cerró unos años antes de la devaluación del 2002 para reiniciarse posteriormente (de Martinelli, 2008; Grosso, y otros, 2010).⁷

Al mismo tiempo, durante este período, se verifica el aumento de un fenómeno ya registrado en décadas anteriores: el avance de la producción agrícola en la región pampeana (e incluso fuera de

ella). Entre 1991 y 2001, la superficie sembrada con granos, en dicha área, pasó de casi 15 millones de ha a más de 21 millones. Este avance se acelera notablemente desde 1996, año en que se habilita el cultivo de la soja RR y comienza a expandirse la utilización del nuevo paquete biotecnológico.

En cuanto a la estructura agraria, ya en 1988 se verificaba un aumento de las formas combinadas de tenencia (esto es: propiedad y arrendamiento o propiedad y contratismo), que continuaría desarrollándose durante el período estudiado. Este fenómeno parece responder, en buena medida, al notorio incremento de la escala media necesaria para poner en marcha los procesos productivos. De esta forma, son principalmente los propietarios de las unidades de menor tamaño los que, expulsados de la producción como capitalistas, comienzan a arrendar sus ahora pequeñas porciones de tierra (Barsky y Dávila, 2008).

Sobre estas bases, vamos a detenernos en el análisis de la acción política de la FAA durante el período de Convertibilidad del peso.

3. La acción política de la FAA durante la Convertibilidad

Como hemos señalado, el CNA de 1988 había mostrado la desaparición de casi la mitad de las unidades menores a 100 ha durante las dos pasadas décadas, en un proceso que no daba señales de detenerse. En este contexto asumió, en 1989, el gobierno menemista.

3.1 Los primeros años de la Convertibilidad (1991-1995)

Tras identificar como características principales del Gobierno entrante la privatización de empresas públicas, la desregulación de distintas ramas de la producción y la apertura económica, la FAA cerraba el año 1989 en un estado de alerta. El avance de dicho proceso pronto la impulsaría a pasar a la acción.

En marzo de 1991 la entidad motorizó el primer paro agrario del período, para cuya realización había logrado sumar a CONINAGRO y la CRA. La respuesta del Gobierno, sin embargo, desactivó la participación de esta última entidad mediante el anuncio de un llamado “pacto fiscal” que satisfacía un deseo añorado por todas ellas: la eliminación de las retenciones a la exportación. De forma complementaria, se incrementaba ligeramente la magnitud del crédito destinado al sector para abarcar a otros tres mil productores, siempre que no estuvieran ya endeudados. Este anuncio, respaldado por la SRA, bastó para que la CRA abortara su participación en el paro, aunque no pudo evitar que una de sus federaciones, la Confederación de Asociaciones Rurales de Chaco y Formosa (CHAFOR), se uniera a la medida.⁸ Para la FAA, en cambio, que exigía medidas más sustantivas, como el establecimiento de precios sostén, los anuncios fueron insuficientes. Junto a CONINAGRO, por lo tanto, decidieron seguir adelante con la medida (*Clarín*, 18/3/91).

El paro tuvo mayor impacto en la región pampeana, en la que se realizaron actos concentrados principalmente en el sur de Santa Fe y el norte de Buenos Aires, y en menor medida en Córdoba y Entre Ríos (Clarín, 19/3/91). En el mes siguiente, la sobrevaluación de la moneda, que ya había comenzado a imponerse el año anterior (Iñigo Carrera, 2007), se asentaría por un largo período a través de la sanción de la Ley de Convertibilidad.

Una nueva acción de protesta fue resuelta por la FAA en octubre del año siguiente, en su 80° Congreso Anual. En espera de una reunión con el Gobierno, las restantes organizaciones no adhirieron inmediatamente. Allí les fue anunciada una ley de devolución de impuestos indirectos por la exportación de productos primarios, así como el establecimiento de aranceles compensatorios por las importaciones de productos lácteos y una disminución del IVA para la producción de granos y carne. Nuevamente, la SRA respaldó los anuncios, mientras que las restantes entidades los consideraron insuficientes. En consecuencia, CONINAGRO y la CRA se plegaron al paro dispuesto por la FAA para el 2 y 3 de noviembre (*La Nación*, 19 y 23/10/92). La medida tuvo un éxito algo menor a la anterior, en parte porque CRA y CONINAGRO sólo apoyaron un paro pasivo. Por lo tanto, los actos y movilizaciones fueron sostenidos principalmente por la FAA y cobraron fuerza sobre todo en el sur de Santa Fe y, en menor medida, en el norte de Buenos Aires, Entre Ríos y Córdoba. Fuera de la región pampeana, tuvieron especial importancia los cortes de ruta de Chaco y Formosa, que paralizaron virtualmente las provincias. La escasa repercusión en la región pampeana se explicó, de acuerdo a Humberto Volando, presidente de la FAA, por el hecho de que los productores pampeanos atravesaban una situación menos crítica (*La Nación*, 2, 3 y 5/10/92). Muy pronto iba a cambiar esta circunstancia.

Al año siguiente, una caída en el precio comercial de los granos afectaría especialmente a la fracción pampeana de la base social de esta entidad. Además, crecía el número de deudores morosos y la sobrevaluación había abaratado la importación de pollos, cerdos y lácteos, que comenzaba a expandirse. Las tres entidades convocaron un nuevo paro para julio de 1993, esta vez acompañado de marchas desde el interior a Plaza de Mayo (*Clarín*, 27/6/93).

Esta acción tuvo mayor trascendencia que las anteriores. En primer lugar, porque la marcha hacia el centro de la ciudad de Buenos Aires le dio mucha mayor visibilidad. Alrededor de dos mil vehículos, entre los que se contaba un buen número de tractores y camionetas, ingresaron a Plaza de Mayo por tres columnas, provenientes de distintas áreas de la región pampeana, en especial del norte de Buenos Aires y del sur de Santa Fe. Al mismo tiempo, hubo muchas más movilizaciones y cortes de ruta en el interior del país, concentradas principalmente en Santa Fe, el sur de Córdoba y Entre Ríos. En regiones extrapampeanas, se desarrollaron actos y marchas en Tucumán, Mendoza, la Patagonia y el noreste (*Clarín*, 27/7/93). En el petitorio que las tres entidades consensuaron entregar a la Casa Rosada, se pedía nuevamente la refinanciación de las deudas, el aumento de la financiación pública y privada, menores tasas de interés, reducción impositiva, disminución de las importaciones de mercancías agrarias producidas localmente y compensaciones por la caída de precios de los granos. En los discursos, las quejas abarcaron también el tipo de cambio, aunque no se pedía explícitamente

la salida de la Convertibilidad (*La Nación*, 28/7/93). Por su parte, y tras una reunión con el ministro de Economía Domingo Cavallo, la SRA expresó su rechazo al paro (*La Nación*, 26/7/93).

En junio de 1994, y ante la falta de respuestas a sus principales reclamos, tanto la FAA como la CRA y CONINAGRO participaron de la Marcha Federal, una movilización convocada por centrales sindicales que se habían desprendido de la CGT, en la que también confluyeron partidos políticos y organizaciones de trabajadores y capitalistas. Dos meses más tarde, determinaron la realización de una nueva acción conjunta, la cuarta que enfrentaría el gobierno de Menem. Al igual que en los paros anteriores, Cavallo convocó a una reunión con las cuatro organizaciones y propuso medidas que no satisficieron sus reclamos, a excepción, nuevamente, de la SRA, que se retiró conforme. Las restantes decidieron entonces llevar adelante el paro, que se extendería diez días (*La Nación*, 4 y 6/8/94).

Nuevamente, la región pampeana fue el núcleo de la acción. Allí, las organizaciones formaron comités para garantizar, mediante cortes de ruta, la efectividad de la interrupción del transporte de mercancías. Se observó un acatamiento masivo en Santa Fe, Buenos Aires, Entre Ríos, Córdoba y La Pampa, y se registraron movilizaciones y "tractorazos". La protesta se extendió además a las provincias del noreste, Mendoza y zonas de la Patagonia (*La Nación*, 12 al 22/8/94).

Las reiteradas acciones conjuntas, sin embargo, carecieron de la potencia para torcer el sentido general de la política económica. Su impulso se detendría durante los dos años siguientes, en los que un alza momentánea en el precio de los granos dio un respiro a los pequeños capitalistas y productores independientes de la región pampeana. En el interior de la FAA, mientras tanto, soplaban vientos de cambio.

3.2 Gremialismo o entidad de servicios: Bonetto y las discusiones internas

En 1996, Humberto Volando, presidente de la FAA durante veinticinco años consecutivos, abandonó la entidad para dedicarse a la política nacional de la mano del FREPASO. En su lugar, fue electo el ingeniero René Bonetto, hasta entonces vicepresidente.

Con un perfil marcadamente técnico, Bonetto intentó darle una nueva impronta a la organización, caracterizada principalmente por una reorientación hacia la oferta de servicios a sus asociados, entre los que se destacaban especialmente las capacitaciones técnicas. En este sentido, Lattuada refiere que el objetivo principal era la búsqueda de una reconversión de los productores y sus explotaciones, para dotarlos de condiciones competitivas (2006,188). Pero esto implicaba, al mismo tiempo, un debilitamiento en la política de confrontación, en la medida en que se buscaría priorizar la instancia de negociación.

En oposición a esta línea, comenzaba a delinearse, en el interior de la FAA, una corriente interna que iba a jugar un rol significativo en la vida política de la entidad. Se trata de Chacareros Federados

(CF), que se presentaría a elecciones internas por primera vez en el congreso de 1996 como oposición al oficialismo representado por Bonetto.

Esta corriente tiene su principal base de sustentación en el Distrito VI, que cubre la mayor parte del sur y una parte del centro de la provincia de Santa Fe, en donde se localizan las condiciones naturales diferenciales más favorables para la producción de granos y donde existe un gran número de pequeñas explotaciones (Cloquell, 2005), cuya escala comenzaba a quedar atrás en el proceso de concentración y centralización del capital agrario. De hecho, se trata del distrito con mayor cantidad de socios de la FAA y uno de los que registra la mayor cantidad de filiales.

Como destacan Telechea y Muñoz (2011, 22), sus principales dirigentes provienen del Partido Comunista Revolucionario (PCR). Entre ellos, el más destacado fue Carlos Pailolle, mejor conocido como "El Vasco", miembro del Comité Central del PCR hasta su muerte en el año 2009 (*Hoy*, 18/11/09) y director del distrito VI de la FAA.

Las reivindicaciones políticas de CF durante la década de 1990 no distaban demasiado de las que expresara anteriormente Volando: precio sostén para las producciones agrarias, subsidios y créditos para la producción y refinanciación de deudas. A esto se agregaba la clausura de los remates y, hacia el final de la década, la salida de la Convertibilidad para devaluar el peso. En cuanto a la acción política, se hallaban estrechamente vinculados con otras dos organizaciones agrarias: el Movimiento de Mujeres Agrarias en Lucha (MMAL) y el Frente Agropecuario Nacional (FAN) (Telechea, 2009). Junto a ellas, y arrastrando además a la conducción oficial de la FAA, realizarían una gran cantidad de acciones políticas durante los siguientes años.

Sobre esta base, se opusieron frontalmente al perfil que Bonetto buscó darle a la entidad, especialmente en cuanto este se caracterizaba por una disminución de la confrontación con el Gobierno:

Bonetto planteaba una entidad menos confrontativa, *aggiornada*... Usaba mucho el término "*aggiornamento*", o sea, la adecuación a los nuevos tiempos... [planteaba] una entidad más de servicios, bajar el tono de la confrontación (Entrevista a dirigente de CF).

En este sentido, uno de los aspectos a los cuales CF se oponía más decididamente era la posibilidad de transformar la FAA en una confederación:

A partir del '94, se discutía la posibilidad de dejar de ser una entidad de segundo grado, y armar una confederación... Bonetto impulsaba esto. Entonces, si Córdoba quiere tener un discurso opositor al Gobierno lo puede tener, y si Santa Fe quiere acercarse políticamente, lo puede hacer. Y eso diluiría la lucha. Nosotros creemos que contra una política que es nacional, tiene que haber una oposición política nacional, un discurso debe contraponerse contra el otro discurso de forma unificada. (Entrevista a dirigente de CF)

Asimismo, rechazaron inicialmente el intento de establecer una relación de mayor cercanía con la SRA, posición que encarnaba Bonetto (Bidaseca, 2007; Telechea y Muñoz, 2011).

La disputa por el perfil de la entidad marcó su vida interna durante los cuatro años que duró la presidencia de Bonetto. Se trataba no sólo del funcionamiento interno de la entidad sino también de la forma de acción: mientras que los CF insistirían en la necesidad de enfrentarse a los Gobiernos para lograr sus objetivos, Bonetto prefería el camino de la negociación (Bidaseca, 2007).

De este modo, frente a la merma en la disposición a desarrollar acciones políticas que caracterizó a la conducción oficial de la entidad, fue la fracción de los afiliados que respondían a CF la que, como veremos, empujaría a la conducción a participar de estas acciones.

3.3 El empuje de CF y un nuevo ciclo de acciones políticas (1996-1999)

La autorización para el uso de la soja RR en 1996, a la que se añadirían otras semillas transgénicas, permitió la introducción de un nuevo paquete tecnológico que se impuso rápidamente, lo que impulsó el avance de la agriculturización y de la concentración y centralización del capital agrario. De esta forma, y a pesar de las disputas internas, la acción política de la FAA iniciaría un nuevo ciclo a partir de ese año.

Una nueva alza del impuesto a los combustibles, anunciada en agosto de 1996 por Roque Fernández, el flamante ministro de Economía, dio por tierra con el breve lapso de calma. Al mismo tiempo, tras la privatización de buena parte del capital bajo control estatal, el Gobierno comenzó a apuntar hacia los restos. Entre ellos se hallaba el Banco de la Nación, que concentraba la mayor parte de la deuda del sector agrario.

Este último aspecto inquietó particularmente a las cuatro entidades, que fueron llamadas a dialogar por el ministro. La FAA, sin embargo, decidió no asistir (*La Nación*, 28/8/96). En lugar de ello, convocó a una manifestación en la sede rosarina del Banco de la Nación, para reclamar la suspensión de los remates por deudas y su refinanciación y manifestar su oposición a la posible privatización. La protesta fue organizada por la dirigencia de CF y sostenida principalmente por sus bases (*La Nación*, 26/10/96).

Al año siguiente, una sequía, que afectó especialmente a Córdoba y Santa Fe, llevó a la FAA a realizar “tractorazos” en ambas provincias en reclamo de créditos. El primero fue llevado a cabo en junio en la localidad santafecina de Cañada de Gómez, y también fue comandado por CF. Un mes más tarde, repitió la acción en la ciudad de Córdoba (*La Nación*, 7 y 17/7/97).

Hacia fines de diciembre, el Banco Nación anunció una refinanciación de deudas por mil millones de pesos, que alcanzaría a unos veintiún mil productores. Pero estos no tuvieron demasiado tiempo para relajarse. El año nuevo llegó con más incrementos en los precios del peaje, lo que desataría otra serie de acciones de protesta.

La primera fue un corte de ruta al sur de la provincia de Santa Fe el 23 de enero de 1998, promovido por CF. Durante los dos meses siguientes, la FAA repetiría la acción cuatro veces más en distintas localidades de Córdoba y Buenos Aires. En la mayoría de estas acciones fueron acompañados por CONINAGRO, federaciones adheridas a CRA (CARTEZ o CARBAP, según la región), el MMAL y entidades que representan a los transportes de carga (*La Nación*, 23 y 30/1, 11 y 28/2 y 12/3/98).

Ya en un contexto de crisis económica general, el Gobierno dispuso en abril una reforma impositiva, que elevaba nuevamente los impuestos a la producción agraria. Fue demasiado, incluso a los ojos de la SRA. Por más que de momento se atuvieron a su estrategia de no realizar acciones de protesta frente al gobierno de Menem, comenzaron a hacer público su descontento: “como desastre, está bastante bien logrado”, declaró su presidente, Enrique Crotto (*La Nación*, 12/5/98).

Pero aún no le había llegado el tiempo de pasar a la acción, lo que seguía quedando a cargo de las restantes organizaciones. En agosto, CARBAP realizó un paro, con el apoyo de la CRA y la FAA. Dos meses más tarde, la FAA realizó un acto en Plaza de Mayo, con el apoyo de la CTA. En diciembre, la FAA, CONINAGRO y CRA cerraron el año con una serie de asambleas en las que discutieron nuevas medidas de fuerza y se dispuso realizar en enero una movilización en Pergamino (*La Nación*, 3/8, 9/9 y 28/12/98; 9 y 13/1/99).

La devaluación de la moneda brasileña echó más leña al fuego, al expandir las importaciones locales de pollos y porcinos, en primer lugar, y posteriormente incluso las de trigo. Por añadidura, los precios de los granos continuaban cayendo.

Frente a este panorama, la FAA intensificó sus acciones gremiales. En febrero, de la mano de CF, realizó un corte de ruta en Cañada de Gómez, junto a CONINAGRO. Los cortes se multiplicaron por veinte el mes siguiente en la provincia de Córdoba, en una acción coordinada con CARTEZ (*La Nación*, 19/2 y 18/3/99).

En respuesta, el presidente Menem recibió por separado a los representantes de las cuatro entidades. A falta de propuestas concretas, sin embargo, ninguna se fue conforme. La semana siguiente, FAA y CONINAGRO protagonizaron un nuevo corte de ruta, esta vez en Concordia (*La Nación*, 6 al 11/3 y 14/3/99).

La situación había acabado, finalmente, también con la paciencia de la SRA: por primera vez en diez años de Gobierno menemista, resolvió interrumpir el diálogo y pasar a la acción. El 24 de marzo anunció la realización de un paro ganadero de siete días, al cual se plegó inmediatamente la CRA. Por su parte, la FAA y CONINAGRO acordaron participar de la protesta y propusieron sumar una marcha. Mientras tanto, llevaron adelante una movilización al sur de Santa Fe (*La Nación*, 24 al 29/3/99).

Este escenario inquietó al Gobierno, que ensayó una nueva estrategia disuasoria. Tras desplazar al Secretario de Agricultura, buscó desactivar la acción conjunta convocando al diálogo a la SRA y la

CRA. Pero por primera vez, la primera se negó a participar de la reunión, y arrastró en su negativa a la segunda. El segundo intento consistió en un anuncio de medidas. Pero todo lo que ofreció como prenda de negociación fue la prórroga en el pago de rentas para los campos inundados y un proyecto de ley de apoyo crediticio (*La Nación*, 1° y 8/4/99).

Fue demasiado poco y demasiado tarde. Las organizaciones rechazaron en bloque las medidas. El 12 de abril iniciaron la semana de paro, en la cual el comercio de carne y granos se vio virtualmente paralizado. A esto se sumaron algunos piquetes aislados en el norte de Buenos Aires y en Entre Ríos, así como un “tractorazo” en Santiago del Estero, sostenidos principalmente por la FAA (*La Nación*, 19, 20 y 29/4/99).⁹

A pesar de la enorme carga simbólica que conllevaba la realización de una acción política conjunta por parte de las cuatro entidades, el Gobierno no reaccionó inmediatamente. En consecuencia, la FAA propuso en mayo un nuevo paro, al que se sumaron el resto de las entidades. Y, nuevamente, el Gobierno convocó a negociar a la SRA y la CRA. Esta vez, con un anuncio apenas más sólido: la elevación del capital mínimo que tributaría el impuesto a la renta presunta. Esto se sumaba a otras medidas aprobadas durante el paro, como la prórroga en el pago de dicho impuesto, una línea de crédito para deudores morosos y el aumento de los impuestos a la importación de cerdos y lácteos. Fue suficiente para que la SRA desistiera de realizar la acción. Pero no para las restantes entidades, que convocaron a un nuevo paro de cuatro días con movilizaciones y cortes para el mes de junio. La mayoría de los cortes de ruta se realizaron en el sur de Santa Fe, en el oeste de Entre Ríos y, en menor medida, en Córdoba y La Pampa. También hubo piquetes y marchas en Chaco, Mendoza, Formosa y Jujuy. En Rosario, la FAA organizó una movilización junto a los transportistas de carga. Aunque rechazó los métodos de la protesta, la SRA hizo un llamado a las restantes entidades para coordinar el reclamo de medidas (*La Nación*, 11 y 25 al 29/5 y 2 al 10/6/99).

El Gobierno dispuso, finalmente, un paquete de medidas fiscales a instrumentarse desde el Banco Nación: suspensión de los remates por ciento ochenta días, flexibilización de las condiciones de ingreso a un plan de refinanciamiento de deudas a veinte años, ampliación de los beneficiarios y extensión de un crédito para cooperativas. Sin embargo, las organizaciones no tuvieron siquiera tiempo para pronunciarse sobre la cuestión. Tres días después, una nueva instrumentación en el cobro del IVA volvió a agitar los ánimos (*La Nación*, 10 y 14/6/99).

La FAA y CONINAGRO confirmaron la marcha que tenían prevista para junio, pero la postergaron para el mes siguiente a la espera de una resolución de la CRA. CARBAP se sumó casi inmediatamente y, tras una nueva reunión fallida con el Secretario de Agricultura, la CRA dispuso su participación. Esta vez, al paro sumaron una marcha a Plaza de Mayo, al igual que en 1993. Pero en esta ocasión, lograron duplicar la asistencia; aproximadamente diez mil personas ingresaron al microcentro, provenientes en su mayoría de distintas áreas de la región pampeana. Dos días después, una protesta en Entre Ríos, en la cual participó la FAA, frustró un acto en el que iba a participar el presidente Menem (*La Nación*, 24 y 26/6, 16, 21 y 22/7 y 24/7/99).

Aunque quedaban apenas seis meses de mandato presidencial, la situación se había vuelto insostenible. El Gobierno convocó, una vez más, a una reunión con las entidades, en la que negociaron refinanciaciones de deudas a veinte años, créditos para siembra y cosecha a baja tasa de interés y seis meses de peajes subsidiados, entre las resoluciones más destacadas. Aunque fueron juzgadas insuficientes, ninguna entidad respondió anunciando más protestas. Pero, un mes más tarde, el Banco Nación rechazó las propuestas de créditos y refinanciaciones (*La Nación*, 27/7 y 21/8/99).

En respuesta, la FAA despidió a Menem con un nuevo paro de dos días, que tuvo un alto nivel de acatamiento en la región pampeana, especialmente en el sur de Santa Fe. Allí realizaron numerosos cortes de ruta, con el apoyo de entidades de transportistas de carga. Asimismo, se desarrollaron acciones en el Chaco (*La Nación*, 13 y 15/9/99).

Apenas unos días más tarde, de la Rúa fue electo presidente. El recambio presidencial sumergió a las entidades agrarias en un compás de espera. Para la FAA, quizás, demasiado extenso.

3.4 Del impasse a la reacción: la FAA frente al gobierno de la Alianza

Las cuatro entidades acogieron de buena manera la llegada de de la Rúa al Gobierno. Particularmente, el refinanciamiento de deudas, el apoyo a las pymes y un rol más activo del Banco Nación fueron valoradas por Bonetto como ideas “positivas”. Asimismo, el desembarco en la SAGPYA de Antonio Berhongaray fue aprobado de forma unánime. No obstante, la FAA, CONINAGRO y la CRA emitieron casi inmediatamente una declaración conjunta, exigiendo al Gobierno entrante medidas para enfrentar la crisis. De momento, todo lo que obtuvieron fue la oferta de créditos a baja tasa de interés para retener la producción de trigo, cuyo precio había caído marcadamente al momento de la cosecha (*La Nación*, 31/10, 2 al 4 y 30/11 y 18/12/99).

La llegada del radicalismo al Gobierno potenció las discusiones en el interior de la FAA. Vinculado desde hacía años a la Unión Cívica Radical, Bonetto fue tentado a formar parte del directorio del Banco Nación. Cargo que aceptó sin renunciar a la presidencia de la organización, para la cual tenía mandato hasta fines del 2000 (*La Nación*, 22/12/99).

Este movimiento dejaba a la FAA en una posición difícil, ya que le restaba margen de maniobra para enfrentar al Gobierno si no mejoraba la situación de su base social. Y, por cierto, no fue el caso.

El año 2000 se inició con una rebaja en los peajes, una breve prórroga en los desalojos y una refinanciación de deudas a no menos de diez años, que abarcaría a veinticinco mil productores. Las cuatro organizaciones aprobaron tibiamente estas medidas, aunque las consideraron insuficientes (*La Nación*, 6 y 25/1 y 5/2/00). Poco iban a tardar en volver a la acción.

CARBAP dio esta vez el puntapié inicial. En una asamblea celebrada en Junín, amenazó con realizar el primer paro. La falta de propuestas concretas tras una reunión de las cuatro entidades con de la

Rúa y su ministro de Economía, José Luis Machinea, acortó aún más los tiempos. Mientras, la FAA publicaba un documento en el que se exigían medidas, aunque sin considerar aún la posibilidad de realizar acciones de protesta. Similar posición presentaban CONINAGRO y la SRA (*La Nación*, 26/3, 22/4 y 6/5/00).

En mayo, otra reunión con Machinea tuvo como resultado el anuncio de una baja de las tasas de interés de la deuda bancaria de las entidades. No fue suficiente para CARBAP, que finalmente convocó al paro hacia fin de mes. Además de arrastrar a la conducción de la CRA, buscó sumar a las restantes entidades (*La Nación*, 18 al 22/5/00).

Pero estas no se decidían aún a pasar a la acción. El panorama se enrareció aún más con un nuevo movimiento de Bonetto, quien dejó el directorio del Banco Nación para formar parte oficialmente del Gobierno de la Alianza al aceptar el puesto de Secretario de Provincias en el Ministerio del Interior (*La Nación*, 12/6/00). De este modo, ya ni siquiera podía argumentar que había aceptado el puesto para buscar desde allí una solución al endeudamiento de los socios de la entidad, como lo había hecho anteriormente.

No faltaban, sin embargo, más que unos meses para la realización de un nuevo Congreso Ordinario, en el que se elegiría al próximo presidente. De momento, la adhesión a un corte de ruta de entidades de camioneros en protesta por otro aumento de peajes pareció sacar a la FAA del letargo. Del corte participó Eduardo Buzzi, secretario gremial y candidato a presidente de la entidad (*La Nación*, 31/6/00).

Proveniente del FREPASO y con amplio apoyo de las filiales de Córdoba, de La Pampa y del norte de Buenos Aires, así como de buena parte de las regiones extrapampeanas, Buzzi obtuvo la presidencia en las elecciones del 88° Congreso de la entidad.¹⁰ Enfrente, la lista de CF postulaba como candidato a Rubén Lusich, director del Banco Provincia durante la gobernación de Eduardo Duhalde (*La Nación*, 23 y 30/10/00; *El Litoral*, 24, 28 y 30/10/00).

Buzzi heredaba una entidad al borde de la quiebra. A pesar de haber encabezado las acciones de protesta durante los diez años de Gobierno menemista, la FAA no había sido capaz de detener la liquidación masiva de su base social pampeana. Dicho proceso la afectaba doblemente. En primer lugar, al reducir inmediatamente una de sus principales fuentes de ingreso: las cuotas de sus socios. No sólo porque el número de estos decreció marcadamente sino también porque los que se mantuvieron afiliados experimentaron dificultades para pagar sus cuotas, al punto tal de que los ingresos por este rubro se redujeron al 30% entre los años 1992 y 2001; pero también al disminuir la actividad económica de las entidades vinculadas con la federación. Si bien el número de entidades afiliadas no muestra variaciones significativas, sus aportes se redujeron en un 50%. De forma similar, los ingresos provenientes del denominado Complejo Federado, un conjunto de empresas jurídicamente autónomas pero fundadas y organizadas por la FAA, cayeron a la décima parte en el mismo lapso. Otras empresas y cooperativas que pertenecían jurídicamente a la gremial (entre las

que se destacaban una cooperativa de seguros y una empresa de previsión para retiros), y cuyos aportes monetarios se habían vuelto significativos en los últimos años, también entraron en crisis durante esta década y debieron ser liquidadas a partir de 1999 (Lattuada, 2006). En este sentido, uno de los casos más emblemáticos fue la quiebra en ese año de la Federación Argentina de Cooperativas Agrarias (FACA), en la que se nucleaban más de 167 cooperativas locales agrícolas localizadas en Córdoba y Santa Fe.

Lejos de detenerse, este proceso había avanzado aún más bajo el Gobierno de la Alianza. Con el recambio dirigencial, la FAA volvería a la acción. A principios de octubre, la delegación de Entre Ríos formó parte de otro paro de transportistas. Paralelamente, la CRA volvió a la carga con la gestión de un nuevo paro agrario, al que se sumaría la FAA como CONINAGRO. A pesar de que el tono de las críticas de la SRA al Gobierno había ido *in crescendo*, buscó infructuosamente detener el paro “para darle oxígeno al Gobierno y superar este difícil momento político” (*La Nación*, 11/10/00).

Pero la medida siguió en pie. A mitad de mes, las tres entidades realizaron un paro comercial de seis días, al que se sumaron organizaciones de camioneros. Una multitud de piquetes se desarrollaron en distintas áreas de la región pampeana y se extendieron a las provincias de Chaco y Salta. El alto acatamiento logró paralizar casi por completo el comercio de granos y afectó en gran medida a la producción de carne, ya golpeada por la reaparición de focos de aftosa. Muchos piquetes se extendieron incluso algunos días más de lo previsto, con la anuencia de las entidades (*La Nación*, 16 al 22/10/00).

Al mismo tiempo, la FAA comenzó a extender sus alianzas políticas por fuera del sector agrario. En octubre, Buzzi anunciaba formalmente el establecimiento de relaciones con la Central de Trabajadores Argentinos (CTA) para enfrentar al Gobierno, lo que derivó en la participación de la FAA en la Multisectorial. Allí se habían nucleado fracciones del movimiento sindical como la CGT disidente y el Movimiento de Trabajadores Argentinos (MTA), y otros representantes de pequeños capitalistas, como la Cámara de la Pequeña y Mediana Empresa. Por su parte, CF buscó hacer lo mismo tanto hacia adentro como hacia fuera del sector agrario. Hacia adentro, participando en la Mesa Federal Agraria, junto con el MMAL, delegados de citricultores y tamberos de Entre Ríos, yerbateros de Misiones, fruticultores de Río Negro y Neuquén, y algodóneros del Chaco, que se sumaban a su base social pampeana. Sus principales reclamos fueron la implementación de precios sostén, condonación de deudas, suspensión de remates, creación de un fondo anticrisis, rebaja en el precio del gasoil y la no privatización del Banco Nación (Gresores, 2004). Hacia afuera, procuró acompañar al movimiento de desocupados, que cobraba cada vez mayor impulso:

En el 2001 hubo un gran desarrollo en el interior de distintos movimientos, asambleas populares, que fueron anteriores al proceso de Capital Federal. Nosotros participamos de eso, de la Primera y Segunda Asamblea Piquetera Nacional, aunque más como agrupación independiente que como parte de la FAA (entrevista a dirigente de CF).

El 2001 no comenzaba con buenos augurios. En los últimos días del año previo se habían producido graves inundaciones en el noreste de la Argentina y de la región pampeana. Junto con CRA y CONINAGRO, la FAA reclamó medidas compensatorias. En marzo, López Murphy reemplazó a Machinea en el Ministerio de Economía. Su designación fue bien recibida por las entidades agrarias, a excepción de la FAA, que señaló que *“sólo puede ofrecer al país más de la misma receta: dar continuidad y acentuar el esquema de ajustes socioeconómicos, de tan dolorosa experiencia para la población”* (La Nación, 07/03/01).

Fue precisamente lo que intentó hacer. Apenas asumido, anunció un fuerte recorte en el gasto público, lo que desencadenó inmediatamente una marcha, realizada principalmente por estudiantes universitarios contra la reducción presupuestaria en el área de educación, y posteriormente la amenaza de un paro general de todas las fracciones sindicales de la clase obrera. Esto bastó para provocar su renuncia, pero no para desactivar totalmente el paro: la CGT disidente y la CTA llevaron adelante la medida. A ellos se unió la FAA (*La Nación*, 7 y 21/3/01).

El retorno de Cavallo al Ministerio de Economía dio lugar a impresiones similares. Mientras que el presidente de la SRA se mostró “muy satisfecho” por el regreso de “el economista más espectacular del último medio siglo que tuvo el país”, Buzzi advirtió que con Cavallo se iba a “profundizar la recesión”, ya que “representa la consolidación del viejo modelo menemista” (*La Nación*, 21 y 24/3/01).

En junio, el ministro anunció un subsidio a las exportaciones y una rebaja de impuestos, medidas celebradas por las entidades. Igual opinión manifestaron en relación con el anuncio de una modificación en la ley de Convertibilidad que buscaba determinar el tipo de cambio como un promedio del dólar y el euro, y que en la práctica representaba una pequeña devaluación (*La Nación*, 16, 23 y 27/6/01).

Nada de eso alcanzó a concretarse. A finales de julio, los acontecimientos comenzaron a precipitarse. Un nuevo plan de ajuste fiscal tuvo como respuesta un paro seguido de movilización convocado por el Frente Nacional Contra la Pobreza, en el que se nucleaban las organizaciones sindicales cercanas a la CTA, así como algunas que representaban a los pequeños capitales nacionales como APYME y la FAA. CF, mientras tanto, realizó cortes de ruta al sur de Santa Fe (*La Nación*, 31/7, 6 y 8/8/01; *Página/12*, 7/8/01).

Nuevas inundaciones en la región pampeana tuvieron por resultado otra movilización de la FAA, CONINAGRO y CARBAP a Plaza de Mayo (*La Nación*, 6/11/01). Pero con el agotamiento del flujo de plusvalía que ingresaba al país vía el endeudamiento público externo, se agotaba también el papel de la Alianza como representación política general del proceso nacional de acumulación de capital (Iñigo Carrera, 2005). La imposición del corralito bancario fue el último intento de sostenerla, a esta altura, insostenible sobrevaluación del peso. A mediados de diciembre, todo el arco sindical dispuso un paro nacional, al que adhirieron la FAA y CONINAGRO. Los sucesos del 19 y 20 de diciembre precipitaron la caída del Gobierno de de la Rúa.

4. La FAA ante la coyuntura

Los principales reclamos enarbolados por la FAA se orientaban, como hemos visto, hacia la puesta en marcha de medidas compensatorias frente a la situación crítica que atravesaban sus socios. Estas incluían especialmente el establecimiento de precios sostén, refinanciación de deudas, mayor financiamiento público y privado con menores tasas de interés y reducción impositiva.

Durante la primera mitad de la década, la FAA confrontó directamente con el Gobierno. Hacia la segunda mitad, la llegada de Bonetto a la presidencia dio curso a una nueva estrategia. Con un perfil mucho menos confrontativo y más enfocado en la provisión de servicios a sus asociados, desde la conducción de la entidad se propondría no tanto la confrontación como la búsqueda del “*aggiornamento*” a los nuevos tiempos. En otras palabras, se trataba más bien de expandir suficientemente la escala para no quedar atrás en el proceso de concentración, que de intentar detenerlo o amortiguarlo. Sin embargo, esta estrategia tuvo como consecuencia la conformación de una línea de oposición interna, que defendió con uñas y dientes el perfil combativo de la entidad. Con una fuerte presencia al sur de Santa Fe e influencia sobre el resto de las provincias de la región pampeana, CF logró sostener un alto número de acciones con las que enfrentó al Gobierno, y arrastró hacia ellas a la conducción oficial.

Ambas estrategias se revelaron infructuosas. Como quedaría de manifiesto en el CNA de 2002, a lo largo del período había desaparecido, nuevamente, casi la tercera parte del total de las explotaciones de la región pampeana registradas por el censo anterior, pero esta vez, de mayor escala aún. Un número similar había sido barrido en el resto del país.

Como fue señalado, el principal enemigo de la FAA no se encontraba ya entre las huestes de la clase terrateniente ni entre sus representantes. Lo que diezmaba sus filas a gran velocidad era el proceso de concentración y centralización del capital agrario, que había entrado durante en este período en una aceleración violenta, especialmente desde mediados de la década.

Así lo entendía también la entidad, como se evidencia en un documento preparado para un congreso sobre el uso y tenencia de la tierra, organizado en el 2004:

La situación económica de los agricultores familiares se degradó notoriamente durante los años '90 [...]. Una muestra del deterioro registrado [...] es comparar la superficie que un agricultor debía cultivar en la región pampeana para obtener una renta de 1.200 dólares mensuales. Entre 1979 y 1983 le alcanzaba con trabajar 38 hectáreas [...] pero en 1994 necesitaba 161 hectáreas. Y la campaña 1992/93 fue el colmo: esa escala requería 344 hectáreas [...].

Una característica que avanzó en esos años fue el agravamiento del endeudamiento, que no se debió tanto al resultado de las campañas como sí al reducido margen de utilidades posible

para cubrir los gastos básicos de su supervivencia, mientras el mercado compelia a incrementar la escala y la productividad de cada explotación.

Ese estado de cosas disparó una competencia descontrolada por el alquiler de tierras [...]. El valor de compra y el canon de arrendamiento se duplicaron en una década.

La aparición de la semilla de soja transgénica resistente al glifosato fue el punto de inflexión. La práctica de siembra directa se masificó y eso conllevó a un cambio cualitativo en el modelo tecnológico [...]. Las condiciones imperantes favorecieron la conformación de *pools* de siembra que significaron una presión insostenible para los pequeños y medianos productores en el mercado de tierras para arrendar ante la necesidad de ampliar la escala.

El endeudamiento bancario fue el mal paso de muchos. Para 1999, los chacareros argentinos debían 6.000 millones de dólares al sistema financiero y 3.000 millones a empresas proveedoras de insumos (FAA, 2005, pp. 68-70).

Se trataba, entendían, de la implementación de un modelo neoliberal en la producción agraria, del cual destacaban dos consecuencias específicas. En primer lugar, el avance del proceso de agriculturización, simbolizado principalmente por el cultivo de soja, que desplazaba hacia zonas marginales a las producciones destinadas al consumo interno, especialmente las de carne y leche (FAA, 2005, p. 57). En segundo lugar, una porción creciente de la producción agrícola estaba pasando a manos de *pools* de siembra, lo que afectaba particularmente a la base social pampeana de la FAA. Los *pools* competían ventajosamente por el arrendamiento de tierras que los pequeños capitalistas agrícolas podrían tomar para expandir su escala e incluso sobre las que ya tenían arrendadas. Esto implicaba frecuentemente el desplazamiento de una masa de dichos capitalistas, que se transformaban así en contratistas de maquinaria o incluso en meros rentistas:¹¹

[Estamos dando] una batalla muy difícil de librar, que es el tema de la concentración económica. Los *pools* de siembra, fideicomisos, siembran y pagan lo que vos como productor genuino no podés pagar, y te quedás afuera... Y si sos un pequeño productor, si sos dueño de tierras, la alquilás. Entonces te tenés que ir del campo, estás afuera. Ese campo es muy difícil que puedas volver a ponerlo en producción: no te quedan herramientas, no te quedan animales, no te queda alambrado, no te queda una mierda. Y cuando los precios cambian, bajan los *commodities*, te vas a encontrar con que vas a tener que vender el campo, a lo que te quieran pagar. Porque no te va a servir para nada. Y el alquiler va a ser tan bajo que no te va a alcanzar para comer, y entonces, ¿qué hacés? ¿Te morís de hambre con el campo ahí, porque no querés venderlo? No, lo vendés a lo que te quieran pagar (entrevista a miembro de la Comisión Directiva).

Otra cuestión terrible: vos tenés 50, 150 hectáreas, y alquilás otras 100 o 150. Pero entonces viene el *pool* de siembra, y donde vos pagabas 8 quintales, el otro paga 15. Y el vecino dice: "Flaco, yo te quiero mucho, pero con los 8 que me das vos no vivo, y con 15 sí». O, si sos un

pibe joven, por ahí conseguir tierra es difícil, pero conseguir un equipo de labranza no tanto; entonces arrancás a laburar. Pero viene el *pool* de siembra, el que te dejó sin tierra, y te dice: “Flaco, ¿vos querés laburar? ¿Cuánto querés cobrar? 140. Nosotros te pagamos 80, pibe». Y laburás por 80” (entrevista a miembro de la Comisión Directiva).

Esto significaba, de acuerdo a la entidad, no sólo la existencia de un proceso de concentración en el uso de la tierra, sino también la formación del “desierto verde”, expresión con la que aludían tanto al avance del cultivo de soja como a la expulsión de la producción de los capitalistas y productores agrarios más pequeños y la consecuente despoblación de los pueblos rurales que generaba la consolidación del proceso. La lucha contra ambos fenómenos daría origen al eslogan con que aún hoy la entidad elige identificarse: “Por una agricultura con agricultores” (FAA, 2005).

Este modelo, según señalaban en el documento, habría comenzado a implementarse durante la última dictadura militar y posteriormente se habría profundizado con la llegada de los Gobiernos neoliberales:

Detrás de la coyuntura, para toda Latinoamérica había una receta importada desde el Consenso de Washington, a finales de los ‘80: apertura económica, desregulación financiera, achicamiento del Estado y privatización de las empresas públicas, entre los principales ejes [...].

El Estado fue desmantelado de manera salvaje. Los organismos reguladores se eliminaron para pasar a manos de grupos concentrados que hoy controlan el circuito comercial de origen agropecuario (FAA, 2005, 68).

En consecuencia, la acción política de la FAA estaría orientada hacia la confrontación contra estos Gobiernos, en una alianza sectorial junto a CONINAGRO, a la que se sumaba frecuentemente la CRA; e incluso, cuando la SRA finalmente decidió lanzarse a un paro, la FAA no dudó en adherirse.

La inminencia de la crisis hizo que tanto la conducción oficial de la FAA como CF buscaran expandir su arco de alianzas por fuera de la rama agraria. Una vez superado el momento más álgido, sin embargo, retomaría la acción política de la mano de las otras organizaciones de la rama.

5. Algunas conclusiones

Durante el período de la Convertibilidad, como hemos visto, el proceso de concentración y centralización del capital agrario se acelera fuertemente, lo que se expresa en una liquidación masiva de los capitales más pequeños. Al identificar a los gobiernos neoliberales como causantes de este fenómeno, la FAA los enfrentó de manera directa. Pero no lo hizo en soledad sino buscando coordinar sus acciones no sólo con CONINAGRO, sino también con la CRA y la SRA, cuando le fue posible.

Esta confluencia, creemos, es expresión de las transformaciones sucedidas en la estructura social agraria de la región pampeana durante el llamado “período de estancamiento”. Dicho proceso tiene como resultado la transformación de una multitud de arrendatarios en propietarios, así como la metamorfosis del sistema tradicional de arrendamientos, que había sido una de las principales fuentes de conflicto. Sobre estas bases, la FAA sería capaz de establecer alianzas con organizaciones con las que mantuvo históricamente una relación de enfrentamiento.

El resultado de este proceso, sin embargo, no sólo facilitaría la confluencia política de estas entidades al disolver parcialmente este antagonismo. La condición de terratenientes que comparten ahora sus miembros conlleva, en sí misma, la posibilidad de sostener acciones conjuntas sobre una base específica: la disputa por la renta de la tierra agraria.¹²

En la medida en que la mediación del Estado en este movimiento sea inmediatamente visible, las entidades tenderán a enfrentarse a él por la apropiación de la renta, con mayor o menor virulencia. El caso más evidente es el de las retenciones a la exportación, en las que una porción es recaudada directamente por el Estado bajo la forma de un impuesto específico que recae particularmente sobre la producción agraria, lo que permite a las entidades protestar contra la “discriminación” a la que es sometido el sector. La sobrevaluación de la moneda, sin embargo, dificulta tanto la identificación de este mecanismo (o, al menos, la estimación inmediata de su magnitud) como la articulación de su oposición, en la medida en que no aparece como un impuesto que afecta específicamente a la producción agraria.¹³ Y este es precisamente el mecanismo que se impone durante este período, sostenido por la Ley de Convertibilidad.

De esta manera, y a diferencia de otros períodos históricos (como el que se abre tras la devaluación de 2002), la disputa por la apropiación de renta no logró funcionar como elemento aglutinante para la realización de acciones conjuntas por parte de las entidades. Y, de hecho, lejos de enfrentar a los gobiernos neoliberales, la SRA se mostró, con algunos matices, cercana a ellos durante la mayor parte del período, sobre todo tras la virtual eliminación de las retenciones en 1991, a pesar de que inmediatamente se consolidó un tipo de cambio sobrevaluado en torno al 100%.

Por cierto, tampoco las restantes entidades hicieron de este punto uno de los principales ejes de los reclamos, más allá de algunas referencias ocasionales.¹⁴ De este modo, y a diferencia de otros períodos históricos, la disputa por la apropiación de renta de la tierra estuvo virtualmente ausente como eje del conflicto agrario durante estos años.¹⁵

En lugar de ello, como señalamos, lo que cohesionó a las entidades agrarias fueron las políticas bajo las que tomaba forma la aceleración del proceso de concentración y centralización de capital agrario, que resultaba en la liquidación masiva de los capitales más pequeños. Es en este escenario que, buscando la compañía de las restantes organizaciones, la FAA enfrentó este proceso mediante una confrontación directa con los gobiernos bajo los que tuvo lugar.

Notas

[1](#) Véanse, al respecto, los trabajos de Lissin (2010a; 2010b) y Monterrubianesi(2012).

[2](#) Se ha demostrado, sin embargo, que la SRA no representó exclusivamente a capitalistas ganaderos sino que nucleó también a agricultores. Asimismo, se preocupó también por los problemas de la agricultura y su complementación con la actividad ganadera ya desde finales del siglo XIX. Al respecto, véase Hora (1994).

[3](#) En este sentido, es posible diferenciar analíticamente ambas condiciones, por más que se hallen reunidas en el mismo individuo.

[4](#) Bajo la categoría de *pequeños capitalistas* puede incluirse también a aquellos sujetos sociales que Marx refiere como “productores independientes de mercancías”; esto es, individuos que disponen aún de los medios de producción para trabajar por su cuenta. Las mercancías que producen se entrelazan en el ciclo del capital industrial (Marx, 2009 [1885], 134), por lo que su reproducción como tal se encuentra determinada por el proceso de acumulación en el que se hallan subsumidos. Por lo tanto, pueden asimilarse formalmente a los pequeños capitalistas (Iñigo Carrera, 2014, 649).

[5](#) Tal estructura queda cristalizada de forma relativamente estable en 1956, a partir de la creación de la Confederación Intercooperativa Agropecuaria (CONINAGRO), que nuclea miles de cooperativas distribuidas por todo el territorio y agrupadas a su vez en una docena de federaciones de segundo grado.

[6](#) Un análisis detallado de la acción política de la FAA y de las restantes entidades agrarias durante la primera mitad de la década de 1970 puede hallarse en los trabajos de Sanz Cerbino(2009; 2010; 2012).

[7](#) Un análisis detallado del carácter, funcionamiento, estructura y *performance* de los *pools* de siembra puede hallarse en el trabajo de Caligaris(2015).

[8](#) Cabe destacar que la producción de algodón, principal actividad de los asociados a esta entidad, no pagaba retenciones.

[9](#) Un análisis detallado de la organización de este paro en el contexto de la crisis económica puede hallarse en el trabajo de Salvia (2014).

[10](#) Una descripción de dicho congreso puede hallarse en el trabajo de Bidaseca(2007).

[11](#) Por cierto, otra fracción de este sector social fue capaz de sortear exitosamente estos procesos, expandiendo la escala de producción. De esta manera, la base social de la FAA se tornaba crecientemente heterogénea, lo que dificultaría posteriormente su representación política unitaria. Véase, al respecto, Pérez Trento (2014).

[12](#) El ingreso de un flujo constante de renta de la tierra se constituye como una de las principales características del proceso nacional de acumulación de capital. Sin embargo, esta masa de riqueza social no es apropiada exclusivamente por los terratenientes locales. Por el contrario, su curso es interrumpido mediante diversas formas para desviar una fracción hacia otros beneficiarios: el conjunto de capitales industriales. Entre ellos, sobresale la presencia de fragmentos recortados de capitales normales de origen extranjero, que operan localmente utilizando tecnologías obsoletas en el mercado mundial y restringen su producción a la escala particularmente pequeña del mercado interno. La apropiación de una fracción de renta de la tierra se constituye así en una de las formas en que compensan su menor tasa de ganancia, determinada por la productividad del trabajo inferior a la normal que ponen en marcha. Esa apropiaciónse realiza con la mediación del Estado nacional, que pone en marcha distintos mecanismos; entre ellos, se han destacado históricamente, por su magnitud y recurrencia, las retenciones a las exportaciones y la sobrevaluación de la moneda. La primera recae sobre la circulación de las mercancías agrarias y afecta una porción de renta, que después sigue su curso mediante el pago de subsidios, la compensación por exenciones impositivas, la generación de

capacidad de compra para las mercancías producidas por los capitales en cuestión, etc. La segunda lo hace de forma indirecta, al retener en la mediación cambiaria una fracción de la renta que luego apropian los capitales industriales al importar medios de producción abarataados. Ambos mecanismos, por otra parte, abaratan también el valor de la fuerza de trabajo que pagan estos capitales (Iñigo Carrera, 1998; 2003; 2007).

13 Algunas referencias a las posiciones de los terratenientes frente a las distintas formas de apropiación de renta agraria a lo largo de la historia pueden hallarse en el trabajo de Iñigo Carrera (1998).

14 En un discurso en Chivilcoy, una de las localidades en las que se realizaron actos durante el paro de 1991, Volando denunció explícitamente la relación entre estos mecanismos de apropiación de renta: "En otra época, la eliminación de las retenciones era fundamental. Ahora hay una trampa: el atraso del tipo de cambio que nos quita el 50% del precio" (*Clarín*, 19/3/91). Sin embargo, este reclamo no tuvo la potencia suficiente para imponerse en la agenda de las organizaciones.

15 Aun en el caso de que la personificación del capital y de la propiedad de la tierra se hallen reunidos en el mismo individuo, estos procesos no afectan, de manera general, más que a la fracción de renta que embolsan como terratenientes. Esto es, dejan intacta la ganancia, con lo cual pueden reproducirse normalmente como capitalistas.

Sin embargo, en un escenario en el que el proceso de concentración y centralización del capital agrario se acelera notablemente, una gran masa de pequeños capitalistas comienza a quedarse atrás respecto de la creciente escala de producción que se torna normal para poner en marcha los procesos de producción agrarios. Aquellos que han devenido, a su vez, terratenientes hallan en la apropiación de renta una compensación a su falta de escala como capitalistas. La especificidad con que se acumula el capital en la Argentina, no obstante, tiende a avanzar sobre esta fuente de compensación y acaba por acelerar su liquidación.

Una buena parte de la base social pampeana de la FAA se ve afectada por este fenómeno. Sin embargo, como hemos mostrado, dicho aspecto no aparece como uno de los puntos más salientes de los reclamos de la entidad. Inversamente, las retenciones a la exportación se convertirán, en el período siguiente, en el principal aglutinante de las acciones conjuntas que emprenden las entidades y cuyo punto más alto es alcanzado en el conflicto de 2008.

Bibliografía

Balsa, J. (2006). *El desvanecimiento del mundo chacarero. Transformaciones sociales en la agricultura bonaerense, 1937-1988*. Bernal: Universidad Nacional de Quilmes.

Barsky, O. y Dávila, M. (2008). *La rebelión del campo*. Buenos Aires: Sudamericana.

Barsky, O. y Pucciarelli, A. (1991). "Cambios en el tamaño y el régimen de tenencia de las explotaciones agropecuarias pampeanas". En Barsky, O. (ed.), *El desarrollo agropecuario pampeano* (págs. 309-454). Buenos Aires: Grupo editor latinoamericano.

Bidaseca, K. (2007). *Interrogando la posibilidad de un mundo sin sujetos. Colonas y colonos de cereal, caña y algodón: cultura y política en una arqueología de los mundos rurales*. Buenos Aires: Instituto de Investigaciones Gino Germani, Facultad de Ciencias Sociales, UBA. Documento de Trabajo no. 50. Consultado el 01/06/14 en <http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/Argentina/iigg-uba/20100720103213/dt50.pdf>.

Bisang, R. (2007). "El desarrollo agropecuario en las últimas décadas: ¿volver a creer?" En Kosacoff, B. *Crisis, recuperación y nuevos dilemas. La economía argentina 2002-2007*. Consultado el 02/06/2014 en www.cepal.cl/publicaciones/xml/1/32311/CapVI.pdf

Bonaudo, M.y Godoy, C. (1985). Una corporación y su inserción en el proyecto agro-exportador: la Federación Agraria Argentina (1912-1933). *Anuario-Escuela de Historia-UNR*(11), 151-181.

Caligaris, G. (2015). Concentración y centralización del capital agrario en la región pampeana. El caso de los grandes pools de siembra. *Mundo Agrario*, 16(31), 1-34. Cloquell, S. (2005). Agricultura y agricultores. La consolidación de un nuevo modelo productivo. *Revista de investigaciones de la Facultad de Ciencias Agrarias*(VIII), 29-40.

de Martinelli, G. (2008). "Pools de siembra y contratistas de labores. Nuevos y viejos actores sociales en la expansión productiva pampeana reciente". En Balsa, J.; Mateo, y Ospital, M. S. *Pasado y presente en el agro argentino* (págs. 547-570). Buenos Aires: Lumiere.

de Palomino, M. (1988). *Tradición y poder: la Sociedad Rural Argentina 1955-1983*. Buenos Aires: CISEA/Grupo editor latinoamericano.

FAA (2005). Documento base preparado por la FAA para el Congreso Nacional Latinoamericano sobre el uso y tenencia de la tierra. En FAA. *La tierra. Para qué, para quiénes, para cuántos. Por una agricultura con agricultores* (págs. 47-81). Buenos Aires: Ciccus.

Fernández, D. (2008). El fuelle del estado: sobre la incidencia de las políticas públicas en la concentración de la producción agrícola pampeana (1989-2001). *Documentos del CIEA*, N° 3, pp. 33-68.

Flichman, G. (1977). *La renta del suelo y el desarrollo argentino*. México: Siglo XXI.

Forni, F.y Tort, M. (1984). *Las explotaciones familiares en la producción de cereales de la región pampeana argentina*. Buenos Aires: CEIL.

Gras, C. (2010). "Crisis y recomposiciones de la agricultura familiar (1990-2007)". En Gras, C. y Bidaseca, K. *El mundo chacarero en tiempos de cambio* (págs. 41-65). Buenos Aires: Ciccus.

Gras, C.y Hernández, V. (2009). "El fenómeno sojero en perspectiva: dimensiones productivas, sociales y simbólicas de la globalización agrorural en la Argentina". En C. Gras, y Hernández, V. *La Argentina rural. De la agricultura familiar a los agronegocios* (pág. 15*38). Buenos Aires: Biblos.

Gresores, G. (2004). "El conflicto social en la reestructuración de los cultivos industriales en los '90: el caso de la yerba mate en Misiones". En Salazar Pérez, R.; Galafassi, G. y Lenguita, P. *Nuevas prácticas insumisas en Argentina: aprendizaje para Latinoamérica* (págs. 300-320). Libros en red. México.

Grosso, S.; Bellini, M. E.; Qüesta, L.; Guibert, M.; Lauxmann, S.y Rotondi, F. (2010). Impactos de los "pools de siembra" en la estructura social agraria. Una aproximación a los espacios centrales de la provincia de Santa Fe (Argentina). *Revista de Estudios Regionales*, 6, 115-138.

Hora, R. (1994). Un aspecto de la racionalidad corporativa de la Sociedad Rural Argentina: el problema de la agricultura. *Boletín del Instituto de Historia Argentina y Americana "Dr. Emilio Ravignani"*, 10, 31-59.

Hora, R. (2010). La crisis del campo del otoño del 2008. *Desarrollo económico*, 81-111.

Iñigo Carrera, J. (1998). La acumulación de capital en la Argentina. *XVI Jornadas de Historia Económica*. Universidad Nacional de Quilmes.

Iñigo Carrera, J. (2005). Argentina: acumulación de capital, formas políticas y la determinación de la clase obrera como sujeto revolucionario. *Razón y Revolución*(14), 87-109.

Iñigo Carrera, J. (2007). *La formación económica de la sociedad argentina. Volumen I. Renta agraria, ganancia industrial y deuda externa. 1882-2004*. Buenos Aires: Imago Mundi.

Iñigo Carrera, J. (2014). *La especificidad del proceso de la acumulación de capital en la Argentina*. Buenos Aires: Tesis de doctorado (mimeo).

Lattuada, M. (1988). *Política agraria y partidos políticos (1946-1983)*. Buenos Aires : Centro Editor de América Latina.

Lattuada, M. (2006). *Acción colectiva y corporaciones agrarias*. Bernal: Universidad Nacional de Quilmes.

Lissin, L. (2010a). *Federación Agraria hoy*. Buenos Aires: Capital intelectual.

Lissin, L. (2010b). Consecuencias no deseadas de la acción colectiva empresaria: la Federación Agraria Argentina en la Mesa de Enlace. Un abordaje a partir de la sociología económica. *Papeles de trabajo. Revista electrónica del Instituto de Altos Estudios Sociales de la Universidad Nacional de General San Martín*(6), 1-23.

Makler, C. (2007). "Reflexiones sobre el gremialismo agropecuario en la Argentina". En Graciano, O. y Lázaro S. *La Argentina rural del siglo XX. Fuentes, problemas y métodos* (págs. 344-369). Buenos Aires: La colmena.

Marx, K. (2009 [1885]). *El capital, tomo II*. México: Siglo XXI.

Monterrubianesi, F. (2012). La acción política de la FAA en el contexto de la posconvertibilidad: posicionamientos y estrategias ante un nuevo ciclo económico. *Realidad económica*(267), 90-111.

Pérez Trento, N. (2014). Transformaciones en la estructura social agraria pampeana y organizaciones rurales. El caso de la Federación Agraria Argentina (1990-2008). *XI Congreso Argentino de Antropología Social*. Rosario.

Salvia, S. (2014). Asociaciones empresarias del agro y crisis de acumulación, 1998-1999. Un antecedente de la "Mesa de Enlace". *Mundo Agrario*, 15(28), 1-30. Sanz Cerbino, G. (2009). Tiempos violentos. Los paros agrarios de 1975 y la estrategia golpista de la burguesía. *Anuario CEICS*, 33-61.

Sanz Cerbino, G. (2010). Chacareros golpistas. La burguesía agraria pampeana y el golpe de estado contrarrevolucionario de 1976. *Revista Izquierdas*, Año 3, número 7, 1-19.

Sanz Cerbino, G. (2012). La historia negra de Federación Agraria. La intervención política de los "chacareros" entre Onganía y Videla (1966-1976). *Razón y Revolución*(24), 25-41.

Slutzky, D. (1968). Aspectos sociales del desarrollo rural en la pampa húmeda Argentina. *Desarrollo Económico*, 8(29), 95-135.

Telechea, R. (2009). Rebelión en la Chacra. El Movimiento de Mujeres Agrarias en Lucha, 1995-2008. *Anuario CEICS*, 79-108.

Telechea, R. y Muñoz, R. (2011). Protesta agraria. Los casos del Movimiento de Mujeres Agropecuarias en Lucha y Chacareros Federados. Argentina, 1995-2008. *Revista Izquierdas* N° 10, 1-29.

Fecha de recibido: 15 de septiembre de 2014

Fecha de aceptado: 4 de junio de 2015

Fecha de publicado: 1 de agosto de 2015